

• TRANSICIONES •

Víctor Alejandro Espinoza Valle



Camino equivocado

Desde 1982 el discurso oficial incluyó el concepto de Reforma del Estado como parte de su discurso reivindicativo. Se insistió que la modernización implicaría poner al Estado mexicano a la misma hora del acontecer internacional. Han pasado tres sexenios y aún seguimos esperando que la gran reforma institucional sea llevada a cabo. Transcurre el segundo año de la administración del Gobierno del cambio del presidente Vicente Fox y se sigue viendo como una asignatura pendiente. ¿No será que nos exigimos mucho, abrimos las expectativas y luego es difícil cumplirlas?

La teoría política nos dice que el Estado, con mayúsculas, comprende cuatro grandes ámbitos: Poder, gobierno, población y territorio. Esto quiere decir que cuando hablamos de Estado nos referimos básicamente a la Nación. Asunto realmente complejo es el de reformar de manera global e integrada cada uno de los elementos constituyentes de nuestro Estado-Nación. Ciertamente los ritmos son diferentes en cada uno de los casos. El problema ha sido que el Gobierno, para ponerse al día también en el ámbito del discurso internacional, se empeñó en vendernos la idea de que lo que era posible hacer en el corto y mediano plazos podía llamarse reforma del Estado. Dificultad mayor cuando se trata de gobiernos locales, sin duda tema de una reflexión posterior. Lo que quiero decir es que si desde que se extendió el uso del concepto reforma del Estado se le hubiera llamado simplemente como lo que iba a ser, es decir, como lo que era factible realizar, quizás las ilusiones hubieran sido pasajeras. Pero hemos pasado ya 20 años esperando el gran cambio nacional, que ciertamente requiere de tiempos más largos.

Sin duda, hemos avanzado en el largo camino de transformar a nuestro país. Pero hay rubros en que el déficit es muy grande aún y donde la voluntad gubernamental simplemente nos es suficiente: Por ejemplo en el difícil ámbito de la cultura política donde los cambios requieren periodos de incubación más largos que los de la alternancia de partidos en el Gobierno. Insisto, si desde 1982 el discurso hubiera sido de que la modernización de la economía iba a ir acompañada de una reforma gubernamental, circunscrita a la reducción de la administración pública central y paraestatal, tal vez hubiera podido ser acordada por todos los implicados. Tenemos ejemplos exitosos de modernización y reducción de los aparatos gubernamentales, de manera destacada el caso español, en los cuales las transformaciones del sector paraestatal no implicaron el despido masivo de los empleados públicos, sino que consistió en la reubicación y capacitación de los trabajadores y donde los sindicatos entendieron muy bien que esa política era más benéfica que oponerse y reivindicar sólo el crecimiento burocrático.

Efectivamente, no es el tipo de sindicalismo que el que existe en México, donde la historia muestra una subordinación corporativa al partido oficial y donde lo que se entronizó fueron las prácticas clientelares y despóticas. Pero algo se pudo haber hecho antes de desmantelar la estructura del sector paraestatal en nuestro país o de traspasarlo a precios de oferta al sector privado y sin ningún compromiso de tipo social. La promesa de una reforma del Estado integral no fue suficiente para llevarla a cabo.

La alternancia política producto de las elecciones del 2 de julio de 2000 hizo crecer las expectativas de que nuestro país cambiaría a fondo. Fueron discursos que redituaron electoralmente; incluso se formó una muy amplia comisión para integrar la agenda de la reforma. Otra vez se habló de que se podrían realizar los grandes cambios mediante reformas constitucionales. Pero ¿por qué no llamarles reformas democráticas y precisar sus alcances antes de volver a generar expectativas finalmente incumplidas? Si de lo que se trata es de consolidar la democracia mexicana, ¿para qué prometer lo que requiere más que un sexenio? El riesgo es que la sociedad comience a cuestionar las diferencias entre lo que prometieron los gobiernos anteriores a la alternancia y el actual y llegue a la conclusión que todo quedó en el discurso, para abonar a la desilusión que conduce a la indiferencia ante los asuntos públicos y, de manera destacada, al fenómeno del abstencionismo. Si ya concluyó la transición ¿por qué no consolidar los saldos democráticos?